

C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que don Pedro Romo Rojas, en representación de la Fundación Educacional Indico, sostenedora de Colegio Particular Pudahuel RBD 12.242 - 4, interpone reclamación conforme al artículo 85 de la Ley N° 20.529, en contra de la Resolución Exenta N° 000257, de 4 de marzo de 2024, expedida por la Superintendencia de Educación, en el proceso administrativo instruido por Resolución Exenta N° 2021/PA713/1583, de 1 de agosto de 2022, que rechaza el recurso de reclamación presentado en contra de esta resolución que aplicó a su representada la multa de 51 UTM.

Sostiene el reclamante que el único cargo formulado es: "N° 1 Establecimiento Educacional no aplica correctamente Reglamento Interno."

"Hecho constatado: Se verifica la correcta y completa aplicación del Reglamento Interno y los protocolos de actuación, constatándose que no se adjunta medio verificador que acredite haber realizado la denuncia en Carabineros el día 23 de noviembre, en el momento en que ocurrieron los hechos, lo que involucraría según se informa en las declaraciones, daño a las instalaciones del recinto. Conforme a los antecedentes enviados y revisados, no se registra en las hojas de vida del libro de clases y si así se requería, no se adjunta respaldo de las acciones de derivación, a la afectad y/a agresora, para ser atendidas por personal especializado, en estos casos (psicólogo, orientador, psiquiatra, terapeuta, etc.)".

Señala que el cargo no es efectivo, pues en la etapa administrativa se acompañaron todos los antecedentes que acreditaba que el Establecimiento apenas ocurrió la pelea entre las alumnas en las inmediaciones del establecimiento educacional, afuera de éste, llamó a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EEJXXQXGLQV

Carabineros, al plan cuadrante y al fono 133, y funcionarios policiales que concurrieron a tomar el procedimiento correspondiente, indicaron que dado que la pelea ocurrió en la calle, es decir, afuera del recinto escolar y estando presente la madre de una de las menores involucradas, le correspondía a los tutores legales de las menores efectuar la denuncia, según da cuenta el documento que se adjunta al reclamo, el que consiste en el acta del procedimiento de fecha 23 de noviembre de 2021, tomado por el cabo segundo Claudio Catrilef Morales, donde consta que la jefa de UTP del colegio, doña Catalina Villarroel, llamó al plan cuadrante y al fono 133, por la pelea de las alumnas ocurrida afuera del colegio y en tales circunstancias, le indica Carabineros que la denuncia debe realizarla la madre de la alumna implicada porque es la tutora legal de la menor. Agrega que Carabineros traslada a una de las alumnas y su madre al domicilio y dejan constancia que la madre se niega a efectuar la denuncia por no desear concurrir a la fiscalía.

Además, indica que en la etapa administrativa se adjuntó informe del Director del Colegio y actas de verificador de acciones tomadas por el establecimiento educacional a raíz de la pelea de las alumnas, acciones que, según la resolución recurrida, fueron valoradas positivamente, pero no fueron consideradas como suficientes para tener por corregido el hecho infraccional.

Agrega que, del acta del procedimiento tomado por Carabineros, no se constata la existencia de lesiones de las menores que implicara su derivación para constatarlas y, de los documentos acompañados en la etapa administrativa, se acredita que el colegio si cumplió con denunciar los hechos inmediatamente, a pesar de que éstos no ocurrieron dentro del recinto escolar y es Carabineros quien determina el procedimiento.



Además, informa que se acompañaron actas de verificador de acciones tomadas por el establecimiento educacional en forma posterior, siendo ambas madres y apoderadas citadas al efecto.

Concluye, enfatizando que si se adoptaron todas las medidas correspondientes, no pudiendo el establecimiento ser objeto de sanción, atendida la decisión de Carabineros de radicar en la madres o tutoras legales quienes tenían la obligación de denunciar los hechos ocurridos fuera del establecimiento educacional.

Sostiene que la resolución recurrida incurre en un vicio de ilegalidad, al decidir que los documentos acompañados a fojas 182 y 183 de los antecedentes, no corresponden a una denuncia formal, por lo que decide no ponderarlos.

Indica que la resolución recurrida ha descartado en forma arbitraria las actas de Carabineros tomadas el día de los hechos, por encontrarse escritas a mano y no contar con un logo institucional, lo que no se ajusta al principio de razonabilidad y de libertad de prueba, ya que según Carabineros no cuenta con un sistema único de toma de procedimientos. Lo que no resulta ser un motivo razonable para descartar dar valor probatorio a dichas actas, si lo único que faltaba según la resolución recurrida, era acreditar que se había llamado a Carabineros para denunciar los hechos ocurridos el día 23 de noviembre de 2021, resolviendo mantener la multa impuesta, de 51 UTM.

Además, hace notar, que las sanciones administrativas deben ser precedidas de un debido proceso, partiendo con una formulación cargos, donde se precisen los hechos imputados, seguida de una oportunidad para plantear descargos, donde la defensa pueda incluso invocar hechos nuevos o distintos, no considerados por el fiscalizador, con el propósito de desvirtuar es acusación o, al menos, para fundamentar atenuantes.



Enfatiza que la autoridad administrativa educacional se encuentra en el imperativo de sustanciar un procedimiento justo y racional que satisfaga las garantías del artículo 19, N° 3, de la Constitución Política de la República. De esta forma, añade, a la imposición de sanciones administrativas necesariamente debe anteceder un procedimiento administrativo con un acta o acusación o formulación de cargos precisa y sostenida en una investigación previa, contemplar su comunicación al presunto infractor, la oportunidad para que éste pueda plantear defensas o alegaciones y rendir pruebas.

Reitera que todo justo y racional proceso supone la debida notificación del afectado o bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de presentar pruebas y que éstas sean adecuadamente examinadas, contemplar una resolución dictada por un tercero imparcial en un tiempo razonable y de manera fundada y, por último, posibilidad de impugnar lo resuelto.

Indica que, el derecho a aportar pruebas resulta fundamental en todo proceso y la legislación administrativa autoriza a que los hechos relevantes para la decisión de todo procedimiento se puedan acreditar por cualquier medio de prueba, estando solo autorizado el instructor para rechazar la misma cuando sea manifiestamente improcedente o innecesaria, lo que se consignará en una resolución motivada, según lo dispone el artículo 35 de la Ley N° 19.880, el que transcribe.

Sin embargo, enfatiza, en la resolución recurrida se ha descartado de manera arbitraria las actas de Carabineros tomadas el día de los hechos, por encontrarse escritas a mano y no contar con un logo institucional, lo que no se ajusta al principio de razonabilidad y libertad de prueba, por lo que no existía un motivo razonable para no dar valor probatorio a las actas, si lo único que faltaba según la resolución era acreditar que se había llamado a Carabineros para denunciar los hechos. Por un segundo aspecto del reclamo,



respecto de la procedencia de aplicar el Reglamento Interno por hechos ocurridos fuera del recinto escolar y exigir se tomen acciones, sostiene que la Ley N° 21.128, dispone que conductas se considerarán que atentan gravemente contra la conveniencia escolar al disponer, entre las que ésta no se encuentra.

Enfatiza, que, en cuanto a los hechos, el establecimiento escolar si adoptó las medias previstas en el Reglamento y llamó a Carabineros, denunciando ocurrido y acompañando el acta de procedimiento, e insiste en que el hecho ocurrió fuera del recinto escolar y que por consiguiente, la multa cursada no es procedente y ni tiene fundamento legal.

Refiere, en relación al principio de legalidad, que la potestad sancionadora de la Administración debe sujetarse a éste que obliga a los órganos del Estado a actuar con arreglo a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución y 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2011, que fijó el texto de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Expresa que, en lo que se refiere al derecho sancionador, el principio de legalidad reconoce que se requiere que tanto las conductas reprochables como las sanciones que las reprimen, estén debidamente determinadas en la ley. Lo que encuentra su expresión más específica en otro principio que le sirve de complemento, es decir, el de tipicidad, en el sentido de que no resulta suficiente que la infracción se halle establecida en la ley, sino que debe agregarse la exigencia de que ésta describa expresamente la conducta que la configura, con lo que se resguarda la garantía de la seguridad jurídica, desde que la descripción del comportamiento indebido se pone de antemano en conocimiento del sujeto obligado.

En la especie, indica, lo anterior significa que para sancionar el hecho de que el establecimiento no aplica su reglamento interno,



necesariamente, debe existir una norma en la que esté expresamente regulado el hecho sancionado.

En este caso, asevera, a pesar de que el establecimiento educacional igual tomó medidas, los hechos, esto es, la agresión entre las alumnas, acaeció afuera del colegio y no es por lo tanto procedente sancionar, y al no estar expresamente el hecho regulado en el reglamento, dar aplicación al Reglamento de Convivencia Escolar y menos sancionar su falta de aplicación.

Señala que, además, se ha infringido el principio de imparcialidad, reconocido en el artículo 11, de la Ley N° 19.880, que obliga a la autoridad administrativa a evaluar y/o ponderar los hechos de manera objetiva, con estricto apego a la ley, prescindiendo de cualquier consideración subjetiva.

Sostiene que, que la aplicación de la multa a la representada al no otorgar valor al acta levantada por Carabineros, por estar escrita a mano y no contar el logo institucional, constituye una falta al principio de imparcialidad, pues la institución no tiene un sistema único de control en las respectivas unidades y depende de los recursos de cada unidad.

En definitiva, solicita acoger la reclamación y dejar sin efecto la multa impuesta.

SEGUNDO: Que al informar el reclamo de ilegalidad, quienes comparecen por la Superintendencia de Educación, solicitan el rechazo de éste, con costas.

Precisan que la acción de reclamación se dirigió en contra de la Resolución Exenta N° 000257, de 04 de marzo de 2024, del Fiscal de la Superintendencia de Educación, que acoge parcialmente la reclamación administrativa.

Señalan que el procedimiento se inició por denuncia de fecha 29 de noviembre de 2021, la que en síntesis da cuenta de los hechos acaecidos el 23 de noviembre de 2021, que se inician con la denuncia



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EEJXXQXGLQV

de una apoderada que informa que su hija llega del colegio con múltiples hematomas en distintas partes del rostro, señalando que había sido golpeada por otra alumna del mismo establecimiento educacional y que la madre de ésta, al producirse la agresión de su hija se encontraba en el portón del colegio. Expresa la denunciante que su hija fue golpeada en presencia de tres docentes quienes no la auxiliaron, ni le dieron aviso, no siendo la alumna contenida emocional ni físicamente. Agregando la apoderada que su hija no ha asistido a clases por amenazas enviadas por la agresora y que, el Director del establecimiento le cerró las puertas, no siendo capaces de contenerlas en el problema, ni facilitar las cámaras existentes a Carabineros, y, en definitiva, no realizando el establecimiento educacional la denuncia correspondiente.

Refieren que, el 05 de abril de 2022, a través de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/0810, se ordenó la instrucción del proceso administrativo sancionador en contra del establecimiento educacional y se designó la fiscal instructora a cargo del procedimiento administrativo. Enseguida, con fecha 11 de abril de 2022, se formuló el cargo único, el que consistió:

“Se verifica la correcta completa aplicación del Reglamento Interno y los Protocolos de Actuación, constatándose que no se adjunta medio verificador que acredite haber realizado la denuncia en carabineros el día 23 de noviembre, en el momento en que ocurrieron los hechos, lo que involucraría según se informa en las declaraciones, daño a las instalaciones del recinto. Conforme a los antecedentes enviados y revisados, no se registra el conflicto o pelea ocurrida entre las alumnas AA y BB, en las hojas de vida del libro de clases y así se requería; no se adjunta respaldo de acciones de derivación, a la afectada y a la agresora, para ser atendidas por personal especializado en estos casos (psicólogo, orientador, psiquiatra, terapeuta etc.).



En seguimiento. Establecimiento no aplicó correctamente su “Protocolo de actuación en caso de que se vulnere la integridad física, moral y psicológica de los educandos”, específicamente, no cuenta con evidencia de haber realizado la denuncia en carabineros el día 23 de noviembre, en el momento en que ocurrieron los hechos de violencia a la salida y por los daños presuntamente causados al interior del establecimiento, como se detalló en el acta original N° 221300279 de fecha 14.03.22”.

Se señalan las normas transgredidas: Artículo 46, letra f), del D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. Artículo 8° del Decreto Supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, Anexo N° 1 Circular N° 482, de 2018, de la Superintendencia de Educación.

Indican que, habiéndose notificado al reclamante del plazo para presentar los descargos y medios de prueba, el sostenedor lo hizo en forma extemporánea.

Informan que la Directora Regional (S) de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, mediante Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1583, de fecha 01 de agosto de 2022, aplicó la sanción propuesta por el Fiscal Instructor luego de confirmar el cargo N° 1 formulado, de 51 UTM, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 73, letra b), de la Ley N° 20.529.

Expresan que en contra de esta resolución, la entidad sostenedora interpuso recurso de reclamación, resuelto con fecha 04 de marzo de 2024, a través de la Resolución Exenta N° 000257, del Fiscal de la Superintendencia de Educación que rechazó el recurso de reclamación administrativa, confirmando la sanción aplicada de 51 UTM.

Expresan que, de conformidad a lo descrito en el acta de fiscalización N° 221300554, se constató que el establecimiento educacional Colegio Pudahuel (RBD 12.242), no aplicó correctamente



su “Protocolo de Actuación en Caso que se Vulnere la Integridad Física, Moral y Psicológica de los Educandos”, determinadamente, por no contar con evidencia de haber realizado denuncia ante Carabineros de Chile, el mismo día 23 de noviembre al momento que ocurrieron los hechos de violencia a la salida y por los daños presuntamente causados al interior del establecimiento. Siendo estos hechos de maltrato los que aparecen denunciados ante la Superintendencia con fecha 29 de noviembre del mismo año.

Precisan que el referido protocolo señalaban la obligación del plantel escolar de denunciar oportunamente a los organismos públicos respectivos. Por lo que, precisan, aparece que ninguna de las aseveraciones planteadas por la reclamante demuestran un vicio de ilegalidad en la dictación de la resolución impugnada.

Sostienen que, en cuanto a las acciones adoptadas por el establecimiento en relación a los hechos, ellas se valoran positivamente, sin embargo, no son suficientes para tener por corregido el hecho infraccional.

Respecto del documento adjunto denominado “Acta de Carabineros, de fecha 23 de noviembre de 2021”, expresan que corresponde a una copia del registro de novedades de Carabineros, que da cuenta que la Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica del Colegio Pudahuel llamó a Carabineros, Plan Cuadrante y fono 133, por una pelea entre alumnas del mismo establecimiento educacional, citando que “(...) la denuncia debía efectuarla la madre que se encontraba presente porque era la tutora directa y el hecho violento había ocurrido en la calle(...)”. Sostienen que, a raíz de esta frase, la sostenedora se asila en que no debía realizar la denuncia formal, conclusión que, precisan, es errónea, atendido además el hecho de expresar el funcionario de Carabineros que son las madres de las estudiantes las llamadas a realizar la denuncia, lo que no exime al establecimiento educacional de la obligación de denunciar,



comprendida en su propio Reglamento Interno y la Ley, esta última, afirman, según lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, el que se refiere a quienes obligatoriamente deben denunciar.

Expresan, en relación al documento denominado "Acta de Carabineros", que éste se tuvo a la vista y se consideró tanto por la autoridad regional como en la reclamación administrativa, pero con las siguientes observaciones:

A fojas 182, del expediente administrativo se acompañó la misma Acta (folio 99), pero sin timbre o símbolo institucional, sin embargo, a foja 183, se acompañó acta con el mismo testimonio (transcrito a folio 101), agregando que la madre de la estudiante víctima no realizó la denuncia. Esta última declaración data de fecha 14 de abril de 2022, mientras que el documento acompañado en el reclamo en sede judicial, es idéntico al Acta (folio 99). Agregan, que el mismo antecedente recién se acompaña a la reclamación judicial con timbre institucional de Carabineros, a diferencia del acompañado en el procedimiento administrativo sancionador, y que por motivo que desconocen, no se acompañó ante la Superintendencia. Documentos que tiene firma ilegible sobre el nombre “ Claudio H. Catrilef Morales, cabo segundo de Carabineros”.

Aseveran que, por tales razones estas actas presentadas en sede administrativa no generaron la certeza o certidumbre suficiente para llegar a la convicción que la tutora legal interpuso la denuncia, situación que la entidad sostenedora debió haber realizado para satisfacer lo exigido por su propio reglamento interno.

Sostienen, en cuanto a lo aseverado por la reclamante a que el reglamento interno no es aplicable a los hechos que sucedan afuera del establecimiento educacional, que no es discutido el lugar y las autoras de los hechos de violencia, y que aquel cuerpo normativo, reglamento interno, al efecto dispone:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EEJXXQXGLQV

“Reglas a seguir en caso que exista acoso y violencia dentro y fuera del establecimiento”, agregando, el guion segundo: “(...) Detectado algún caso de bullying dentro o fuera del establecimiento se procederá de la siguiente forma:”, de lo que se sigue que los hechos denunciados debían ser motivo de la activación el Protocolo de Actuación, lo anterior concordado con el ix), del Anexo 6, de la Resolución Exenta N° 482, del año 2018, de la Superintendencia de Educación que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educativos de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, que dispone:

“Anexo 6: Mínimo del Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Maltrato, acoso Escolar o Violencia entre Miembro de la Comunidad Educativa. ix) El deber de los funcionarios del establecimiento, de poner en conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales competentes de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, pronto se advierta. Además, se deberá definir el procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieran tenido lugar en el local que sirve de establecimiento educativo, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tramen conocimiento del hecho.”

Por lo tanto, a juicio del ente fiscalizador, el reglamento interno del Colegio Pudahuel se obliga y alcanza a hechos de violencia ocurridos entre miembros de su comunidad educativa y que sitúen fuera del establecimiento educativo, lo que es armónico con la normativa educativa aplicable.



Añaden, que en cuanto a la obligación que pesa sobre el sostenedor no basta con tener un reglamento interno y protocolos ajustados a la normativa educacional aplicable, sino que tiene el deber de aplicarlos correctamente y cumplirlos a cabalidad, ya que de esta forma el legislador entiende que se están resguardando los derechos de los estudiantes y de la comunidad educativa, respetando los principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el artículo 3° de la Ley General de Educación.

Señalan, en cuanto a la supuesta afectación al principio de imparcialidad que se alega ante el hecho de no aceptar las actas de Carabineros, de fechas 23 de noviembre de 2021 y 12 de abril de 2022, como medio verificador o eximente de responsabilidad del deber de denuncia, éstos no se consideran por los siguientes motivos:

Primero, dicho documento no es equivalente a una denuncia formal, y segundo, la autoridad policial no está facultada para eximir al establecimiento educacional de su obligación de denunciar los hechos que puedan constituir delitos.

En virtud de la presunción de veracidad del acta de fiscalización, consagrada en el artículo 52, de la Ley N° 20.529, es el sostenedor el que debe desvirtuar los cargos formulados, conformados y sancionados, que en este caso no lo logra, ya que sus alegaciones no tienen sustento legal, pues no indica en qué norma el ordenamiento jurídico absuelve al establecimiento educacional del deber de denuncia por medio de una simple acta o registro de novedades de Carabineros de Chile. Además del deber de aplicar el establecimiento educacional correctamente el reglamento interno y el protocolo de actuación.

Aseguran que, por lo anterior, queda de manifiesto que tanto la Autoridad Regional como el Fiscal de la Superintendencia ponderó y valoró la prueba documental con apego irrestricto a las normas de la sana crítica y objetividad, teniendo a la vista siempre la normativa educacional aplicable.



Afirman que de este modo se demuestra que los documentos y pruebas presentados por el sostenedor en la reclamación administrativa y en procedimiento administrativo sancionatorio son deficientes, ya que no cumplen con el estándar exigido por la normativa educacional infringida, principalmente en lo que se refiere a la acreditación de haber realizado la denuncia por hechos que tiene el carácter de delito protagonizados por dos estudiantes del Colegio Pudahuel. Esto es, el comprobante de denuncia realizada por el establecimiento educacional, solo adjunto en sede judicial la copia de acta de registro de novedades de fecha 23 de noviembre de 2021, con timbre institucional de Carabineros de Chile, folio 99.

En sede administrativa, insisten, la reclamante acompañó la misma acta sin timbre institucional de Carabineros de Chile, folio 99 (a fojas 182), y acta de registro de novedades, de fecha 12 de abril de 2022, sin timbre institucional de Carabineros de Chile, folio 101, con la transcripción textual de lo registrado en las actas anteriores más la constancia de que la madre de la estudiante víctima no realizó denuncia (a fojas 183), todas con firma ilegible sobre el nombre Claudio H. Catrilef Morales, cabo segundo de Carabineros, cuya certidumbre ha quedado en entredicho.

Señalan que, por lo anterior, queda de manifiesto que la apreciación de la prueba presentada por el sostenedor fue apreciada conforme a las normas de la sana crítica.

Por último, sostienen, para la determinación de la sanción el Fiscal de la Superintendencia consideró los siguientes elementos:

i) No se acompañaron medios de prueba al recurso de reclamación que permitiera tener por desvirtuados o corregidos los hechos contados en el acta de fiscalización, lo que ha significado la confirmación del cargo formulado.



ii) La proporcionalidad que debe existir entre la sanción aplicada y la gravedad del hecho infraccional, en relación al bien jurídico afectado: buena convivencia escolar.

iii) Además, la proporcionalidad se encuentra vinculada con los demás elementos que deben ser ponderados para graduar la sanción a aplicar, expresados en el artículo 73, letra b), inciso segundo, de la Ley N° 20.529, entre los cuales se observa la matrícula del establecimiento, los recursos que el sostenedor recibe regularmente y la circunstancia, y la agravante - no ponderada - del artículo 80, letra c), de esa misma ley.

Indican, para finalizar, que, de acuerdo artículo 85 de la Ley N° 20.529, el recurso de reclamación es un recurso de legalidad, respecto del acto sancionatorio dictado por la Superintendencia de Educación y, no adoleciendo éste de vicio de ilegalidad, la solicitud de rebaja de sanción resulta improcedente.

Por las razones expuestas, en consecuencia, solicitan que el reclamo sea desestimado.

TERCERO: Que, en estos autos la Fundación Educacional Indico, en su calidad de sostenedora del Colegio Particular Pudahuel RBD 12.242-4, dedujo reclamación de ilegalidad de acuerdo al artículo 85 de la Ley N° 20.529, respecto de la Resolución Exenta N° 000257, de 4 de marzo de 2024, de la Superintendencia de Educación que rechazó el recurso de reclamación administrativa deducido el 23 de agosto de 2022, en contra de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1583/ de 01 de agosto de 2022, que aprueba el proceso sancionatorio, aplicando la sanción de 51 Unidades Tributarias Mensuales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 73, letra b) de la Ley N° 20.529, solicitando, en definitiva, que se declare que no existe infracción a la ley por parte de la reclamante y sea dejada sin efecto la aplicación de dicha multa.



CUARTO: Que, de acuerdo con los antecedentes relacionados, que forman el cargo formulado y los descargos entregados por la parte, determinadamente, del considerando 6). Apartado 7º.-, de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1583/, de 01 de agosto de 2022, (...) analizando los antecedentes conforme las reglas de la lógica y la sana crítica, considerando la potestad entregada por la Ley N° 20.529, teniendo además presente la normativa antes expuesta, los hechos que conforman el cargo formulado, y los descargos entregado por la parte (...)", la autoridad administrativa, Director Regional de la Superintendencia de Educación Metropolitana, está de acuerdo con el informe de proceso propuesto por la Fiscal instructora" y sanciona a la reclamante establecimiento educacional Colegio Pudahuel, R.B.D. N° 12.242-4, en razón de haber asentado que dicho centro educacional, según este mismo considerando 6).7º, "(...) ha cometido una infracción menos grave establecida en el artículo 77, letra c, de la Ley N° 20.529, debiendo aplicarse una sanción del catálogo previsto del artículo 73 de la indicada ley. Teniendo presente que se considerará la cantidad y naturaleza de los cargos, si subsanó integralmente los incumplimientos, el principio de proporcionalidad, el beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, la intencionalidad de la comisión de ésta, como la matrícula total del establecimiento para efectos de aplicar la sanción."

QUINTO: Que, en efecto, la citada Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1583/, de 01 de agosto de 2022, en su considerando 4), da cuenta en el "Cargo N° 1" de que el establecimiento educacional no aplica correctamente reglamento interno en base a que el cargo N° 1, formaliza:

"Hecho constatado:

Se verifica la correcta y completa aplicación del Reglamento Interno y los Protocolos de Actuación, constatándose que no se adjunta medio verificado que acredite haber realizado la denuncia en



carabinero el día 23 de noviembre en el momento en que ocurrieron los hechos, lo que involucraría según se informa en las declaraciones, daño a las instalaciones del recinto. Conforme a los antecedentes enviados y revisados, no se registra el conflicto o pelea ocurrida entre las alumnas A.C. y J.G. en las hojas de vida del libro de clases y si así se requería, no se ajusta respaldo de las acciones de derivación, a la afectada y/a agresora, para ser atendidas por personal especializado en estos casos (Psicólogo, orientador, psiquiatra, terapeuta, etc).

En seguimiento: Establecimiento no aplicó correctamente su “Protocolo de actuación en caso de que se vulnere la integridad física, moral y psicológica de los educandos”, específicamente, no cuenta con evidencia de haber realizado la denuncia en carabineros el día 23 de noviembre, en el momento en que ocurrieron los hechos de violencia a la salida y por los daños presuntamente causados al interior del establecimiento, como se detalló en el acta original N° 221300279 de fecha 14.03.2022.”

SEXTO: Que la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1583/ de 01 de agosto de 2022, en análisis, en el motivo 5), considera:

“(…) 5) Que, con fecha 228/04/2022 la Fiscal Instructora certificó que el sostenedor no presentó descargos en el plazo legal otorgado por el artículo 70 de la Ley N° 20.529.

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 28/04/2022, el representante legal del establecimiento educacional, presentó descargos los cuales se encontraban fuera del plazo legal establecido, conforme a la fecha de notificación señalada en el Considerando anterior, los que de igual modo se tendrán a la vista.”

SEPTIMO: Que, en relación con lo anterior, la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1528/, de 01 de agosto de 2022, en el considerando 6), 5º.-, señala:

“Que la Fiscal ha procedido a revisar los antecedentes aportados como prueba.”



OCTAVO: Que según las conclusiones que se contienen en el fundamento 6), 6º.- de la Resolución Exenta antes singularizada, han de tenerse como hechos establecidos en sede administrativa, los siguientes:

a) “En cuanto al cargo N° 1 formulado, el sostenedor no acompaña evidencia de haber realizado la denuncia ante Carabineros, por los hechos acontecidos el día 23/11/2021 en las afueras del establecimiento educacional, donde la alumna A.C.E habría sido agredida por la estudiante JG.”

b) “La entidad sostenedora indica que la denuncia sería efectuada por la apoderada de la alumna agredida, pero no verifica que ello se haya efectuado para quedar exento de su obligación de denuncia. No fue hasta el mes de marzo de 2022, una vez requerida la información por parte de la Superintendencia de Educación que el personal del establecimiento educacional concurre a la Comisaría respectiva a solicitar el número de denuncia el cual no fue hallado.

Por tanto, el sostenedor no acompaña verificadores de haber cumplido con su obligación legal de denunciar”

c) “Asimismo, no aplica correctamente su reglamento interno, por tanto, se consigna el cargo formulado.”

NOVENO: Que, en estas condiciones, corresponde resolver los problemas que ha planteado el reclamo de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N° 000257, de fecha 4 de marzo de 2024, expedida por la Superintendencia de Educación, en el proceso administrativo instruido por Resolución Exenta N° 2021/PA/13/1583, de 1 de agosto de 2022, determinadamente, al señalar la reclamante que el establecimiento educacional, apenas se registró el conflicto o pelea entre las alumnas AC. y J.G., afuera del recinto del colegio, llamó a Carabineros, al plan cuadrante, y al fono 133, quienes concurren a tomar el procedimiento correspondiente e indicaron que dado que la pelea ocurrió en la calle, es decir, fueran del recinto escolar, y estando



presente la madre de una de las menores involucradas, le correspondía a los tutores legales de las menores de edad efectuar la denuncia.

DECIMO: Que, en lo tocante al rechazo de las alegaciones de la reclamante, cabe tener presente, que la autoridad recurrida - en el fundamento 5º, letra d), de la Resolución Exenta N° 000257, de fecha 4 de marzo de 2024, reclamada de ilegalidad - considera que:

"(...) d) Atendida las alegaciones efectuadas por la reclamante, cabe señalar que, esta autoridad coincide con lo resuelto por la Dirección Regional, toda vez que, habiéndose revisado de manera íntegra el expediente administrativo, no consta ningún medio verificador que dé cuenta que el establecimiento efectuó denuncia oportuna ante Carabineros de Chile según dispone el protocolo en caso de que se vulnere la integridad física, moral y psicológica de los educandos (fojas 33 vuelta), por los hechos acontecidos con fecha 23 de noviembre de 2021, en las inmediaciones del establecimiento educacional.

Debe tenerse presente que, la no aplicación por parte del establecimiento de su propia normativa interna constituye efectivamente una vulneración a la normativa educacional citada previamente. Toda vez que, la correcta aplicación de los instrumentos que regulan la convivencia escolar no hace otra cosa que garantizar el justo procedimiento al que deben ser sometidos sus estudiantes frente a cualquier situación que se vincule a la naturaleza del protocolo, circunstancias en las que estos instrumentos deben ser activados y aplicados íntegramente, sin dejar al arbitrio de terceros la ejecución de alguno de sus pasos, lo que, además, permite al establecimiento contar con un antecedente o procedimiento de respaldo que permitiría relevar la responsabilidad del establecimiento ante una eventual fiscalización.

En efecto, el hecho de que la autoridad policial exprese que son las madres de los estudiantes quienes deben efectuar la denuncia, no inhibe ni exime al establecimiento de la obligación contenida en su



propio reglamento, por lo cual el argumento empleado no exime la irregularidad imputada.

Respecto a las medidas desplegadas por el establecimiento, verificados con los documentos incorporados al expediente administrativo (fs. 159 -181), en relación a las acciones adoptadas por el establecimiento en razón de los hechos, cabe señalar que éstas se valoran positivamente, sin embargo, no son suficientes para tener por corregido el hecho infraccional.

En cuanto al documento acompañado a fs. 182 – 183, previamente incorporado a fojas 140 - 141, cabe señalar que dichas actas no corresponden a una denuncia formal ante la autoridad policial, toda vez que, están escritas a mano y el documento no contiene logo institucional, por lo cual no es posible ponderarlo en el presente proceso a fin de corregir el hecho infraccional.

En mérito de lo expuesto, analizados los antecedentes del expediente administrativo, los elementos probatorios aportados en la etapa de denuncia y la falta de verificadores durante el proceso que desvirtúen el hecho infraccional, el cargo único debe ser confirmado, verificándose una infracción de carácter menos grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, letra c), de la Ley N° 20.529.”

UNDECIMO: Que, por consiguiente, frente a las argumentaciones que se contienen en el reclamo de ilegalidad para demostrar la infracción de ley que se denuncia, cabe considerar que, en lo relativo a la actividad de la reclamante ante Carabineros, el día 23 de noviembre de 2021, a esa fecha esta parte se encontraba regida por el Reglamento Interno del establecimiento educacional, el que, frente a la agresión de una alumna o alumno, disponía de las “Reglas a seguir en caso que exista acoso y violencia escolar dentro o fuera del establecimiento (...)”.



Normas del Reglamento Interno que, en el expediente administrativo, la autoridad reclamada tuvo en consideración referente a los hechos verificados en las inmediaciones del colegio y que imponía el deber de:

“(...) detectado algún caso de bullying dentro o fuera del establecimiento se procederá (...)”.

Es decir, la obligación a hacer aplicación del Protocolo de Actuación frente a tales comportamientos, en consideración al lugar de ocurrencia y de quienes concurren o participan en ellos.

Resultando indispensable para ello considerar lo ordenado por la Circular N° 482, del año 2018, de la Superintendencia de Educación, en aquella parte que dispone:

“Anexo N° 1. Sobre el “Contenido Mínimo del Protocolo de Actuación frente a la Detección de Situaciones de Vulneración de Derechos de Estudiantes”, en la dimensión que el Protocolo de Actuación, debe contener: (...) (v) Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y psicosociales que la institución pueda proporcionar, y las derivaciones a las instituciones y organismos competentes, tales como, la Oficina de Protección de Derechos (ODP) de la comuna respectiva.” (vii) Las medidas formativas, pedagógicas y/o apoyo psicosocial aplicables a los estudiantes que estén involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. (...)”.

“(...) Anexo N° 6. Sobre el “Contenido Mínimo del Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia entre Miembros de la Comunidad Educativa. En la dimensión de: (...) (ix) El deber de los funcionarios del establecimiento, de poner en conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales competentes de cualquier hecho que constituya una vulneración de



derechos en contra de un estudiante, pronto se advierta. Además, se deberá definir el procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el local que sirve de establecimiento educativo, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho.”

DUODECIMO: Que, es evidente por tanto, que las normas contenidas en el Reglamento Interno del establecimiento educacional como en la citada Circular N° 482, del año 2018, de la Superintendencia de Educación antes analizadas, se estructuran en base al artículo 46, letra f), del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del año 2009, del Ministerio de Educación, Ley General de Educación, en cuanto dispone:

“Artículo 46. El Ministerio de Educación reconocerá oficialmente a los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, cuando así lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos:

(...) f) Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas



medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento."

Asimismo, se sistematizan la normativa citada en base al artículo 8º, del Decreto Supremo N° 315, del año 2010 del Ministerio de Educación, el que en los incisos primero y segundo, ordena:

"El sostenedor deberá acompañar a la solicitud de reconocimiento oficial una copia del reglamento interno. Dicho reglamento deberá regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa y garantizar un justo procedimiento en el caso que se contemplen sanciones. Este reglamento deberá respetar los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y no podrá contravenir las normativa educacional vigente.

El reglamento deberá señalar las normas de convivencia en el establecimiento, los protocolos de actuación en casos de abuso sexual, acoso, maltrato y violencia escolar; embarazo adolescente e incluir un Plan Integral de Seguridad y accidentes escolares, las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento, los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan y las instancias de revisión correspondientes."

DECIMO TERCERO: Que, en cuanto al sustento fáctico, además de lo analizado y concluido en el considerando OCTAVO de la presente sentencia, cabe tener presente:

a) Que, según la Resolución Exenta N° 2022/PA/13 1583, considerando 5), en el expediente administrativo se certificó que, con fecha 11 de abril de 2022, se notificó al sostenedor del acto administrativo que formula cargo 2022/FC/13/0335 (fojas 115), se indica que éste tenía para presentar los descargos y medios de prueba, el plazo legal de 10 días hábiles, el que venció con fecha 27 de abril de 2022, y con fecha 28 de abril de 2022, la Fiscal a cargo certifica la no



presentación de descargos por el sostenedor en el plazo legal del artículo 70 de la Ley N° 20.529 (116)

b) No obstante la autoridad, según ese considerando 5), de dicha Resolución Exenta, al presentar sus descargos el representante legal del establecimiento educacional respecto a las medidas desplegadas por el establecimiento educacional éstos se tendrán a la vista, y según el considerando 6), apartados 6° y 7°, analiza y considera los documentos incorporados al expediente administrativo.

Luego, según la Resolución Exenta PA N° 000257, de 04 de marzo de 2024, que rechaza la reclamación administrativa interpuesta en contra de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1583, de 01 de agosto de 2022, esta última reclamada de ilegalidad en sede judicial, en cuanto a los documentos incorporados al expediente administrativo (fojas 159 - 181), aquella razona que, en relación a las acciones adoptadas por el establecimiento en relación a los hechos - según los antecedentes acompañados - si bien las valora positivamente, sin embargo, considera que no son suficientes para tener por corregido el hecho infraccional, y que se ha establecido en definitiva que, se ha cometido por parte del establecimiento educacional una infracción menos grave establecida en el artículo 77, letra c) de la Ley N° 20.529, debiendo aplicarse una sanción del catálogo previsto del artículo 73 de la de la indicada ley, tal como se asentó en la Resolución Exenta N° 20222/PA/13/1583, de 01 de agosto de 2022.

c) En cuanto al documento acompañado (en el expediente administrativo a fojas 182 - 183), previamente incorporado (en el expediente administrativo a fojas 140 - 141) considera la autoridad administrativa que dichas actas no corresponden a una denuncia formal ante Carabineros, por estar éstas escritas a mano y no contener el documento el logo institucional, por lo que no le da valor probatorio, para ponderarlo con el fin de corregir el hecho infraccional.



DECIMO CUARTO: Que, en consecuencia, el decidir la Superintendencia de Educación, en sede administrativa, acerca de la falta de valor probatorio de las actas que provendrían del actuar de Carabineros de Chile, considerando que, del examen del contenido de éstas, desde la perspectiva de la buena fe con que habría obrado la sostenedora, los actos que dan cuenta dichos documentos alteran significativamente lo que ordenan las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia, en relación con el deber legal de actuar de la reclamante, que incorpora el debido cumplimiento del Reglamento Interno y del Protocolo de Actuación, como comportamiento obligatorio de parte del establecimiento educacional, tal como se verifica del análisis efectuado en esta sentencia, cabe concluir, que la autoridad administrativa reclamada ha actuado correctamente al sostener que las citadas actas no constituyen un sustento básico para estimar un correcto actuar o proceder de la reclamante, aunque la decisión administrativa solo se haya referido a los aspectos formales de tales documentos.

DECIMO QUINTO: Que, enseguida, el artículo 77, literal c), de la Ley N° 20.529, califica como falta menos grave: (...) “Infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.” Además, se dio cumplimiento al artículo 73, letra b), inciso segundo, de esa ley, que resguarda la proporcionalidad de la medida sancionadora y, por tratarse el reclamo de ilegalidad de un recurso de derecho estricto, contemplado únicamente controlar los eventuales vicios de ilegalidad que puede contener la sanción en relación con la infracción, no es posible acceder a la propuesta de la reclamante de rebajar la multa impuesta.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 20.529, se declara que **se rechaza** la reclamación deducida por Claudia Galindo López y Pedro Romo Rojas, en representación de la Fundación Educacional Indico, en contra de la Resolución Exenta N°



000257, de 04 de marzo de 2024, de la Superintendencia de Educación, expedida en el proceso administrativo instruido por Resolución Exenta N° 2021/PA/13/1583, de 01 de agosto de 2022.

Se previene que la Ministra señora Araya concurre a la decisión precedente, teniendo para ello, especialmente presente:

1) Que, en la especie, el cargo formulado a la recurrente, se sustenta, básicamente, en dos aspectos: a) No haber realizado la denuncia formal respecto de los hechos relacionados con violencia física entre dos alumnas en las afueras del recinto educacional; b) no se registra el conflicto o pelea ocurrida entre las alumnas A.C. y J.G. en las hojas de vida del libro de clases y si así se requería, no se ajusta respaldo de las acciones de derivación, a la afectada y/a agresora, para ser atendidas por personal especializado en estos casos (Psicólogo, orientador, psiquiatra, terapeuta, etc).

2) Que la recurrente ha centrado todos sus esfuerzos en demostrar, por una parte, que no era obligatoria la denuncia, por cuanto los hechos no se desarrollan en el interior del recinto educacional y, por la otra, que de todos modos si puso en conocimiento de Carabineros de Chile los hechos, toda vez que requirió la presencia policial, señalando expresamente que cualquier denuncia formal posterior debía quedar a cargo de la madre de la alumna agredida.

3) Que, como se desarrolló en el fallo que antecede, conforme a la normativa descrita, el reclamante, sí estaba obligado a realizar la denuncia de los hechos ocurridos en las afueras del establecimiento educacional. Ahora bien, en este punto, la discusión queda reducida a considerar si la circunstancia de haber realizado la denuncia puede verse satisfecha con el llamado a Carabineros, al plan cuadrante, para requerir presencia policial producto de la pelea que se desarrollaba en esos momentos, acción que determinó que los funcionarios policiales concurrieran a tomar el procedimiento correspondiente, lo que se



encuentra acreditado con el llamado que encuentra sustento en el acta del procedimiento de fecha 23 de noviembre de 2021, tomado por el cabo segundo Claudio Catrilef Morales, donde consta que la jefa de UTP del colegio, doña Catalina Villarroel, fue quien requirió la presencia policial.

En este aspecto, quien sostiene esta prevención, considera que el llamado a Carabineros para que se constituyera en el lugar, debe ser considerada como una denuncia suficiente, toda vez que con ello se logró la presencia policial, quedando desde ese momento los antecedentes en conocimiento de la autoridad policial, quien debe informar al Ministerio Público, si los hechos constatados revistiesen el carácter de delitos. En efecto, la denuncia únicamente implica poner en conocimiento de la autoridad, policial en este caso, de hechos que pueden ser constitutivos de delitos; es un acto de mera información, exigencia que, en este caso, se cumplió, toda vez que justamente, es en mérito de ello, que concurrió Carabineros de Chile a realizar el procedimiento de rigor.

4) Que, sin embargo, lo anterior no es suficiente para acoger el reclamo intentado, toda vez que el Colegio no acreditó que en la oportunidad correspondiente registrara la pelea ocurrida entre las alumnas ni acompañó respaldo de las acciones de derivación, a la afectada y/a agresora, medidas que, por tratarse de actos de violencia escolar, resultaban obligatorias para el establecimiento.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro Jorge Zepeda Arancibia y de la prevención, su autora.

Rol contencioso administrativo N° 220 - 2024.

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EEJXXQXLQV

e integrada, además, por los ministros señor Alejandro Rivera Muñoz y señora Sandra Araya Naranjo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EEJXXQXGLQV

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Alejandro Rivera M., Sandra Lorena Araya N. Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EEJXXQXGLQV